



Duterte en La Haya

Rodrigo Duterte ha sido uno de los presidentes más populares de Filipinas desde la vuelta a la democracia en 1986. Su “guerra contra las drogas” fue aplaudida por sus partidarios y criticada duramente por adversarios y defensores de los derechos humanos. La Corte Internacional de Justicia lo tiene bajo arresto —después de capturarlo en Manila—, acusado de crímenes contra la humanidad por asesinatos.

La cifra oficial de muertos durante su mandato presidencial es de 6.200, pero los organismos de derechos humanos lo cifran en 27 mil. La captura de Duterte pone a prueba la eficacia del tribunal para llevar a juicio a un expresidente, algo que está en duda por otras órdenes emanadas de La Haya en contra de líderes como Vladimir Putin o Benjamín Netanyahu, y que no tienen posibilidad de ser ejecutadas.

Con Duterte en La Haya, se espera el anuncio de las fechas en que comenzará el juicio en su contra. Atrás deja a un país dividido entre quienes lo apoyaron en su estrategia contra los narcotraficantes y quienes lo acusaron de usar “escuadrones de la muerte” que habrían cometido asesinatos extrajudiciales.

El actual gobierno, dirigido por Ferdinand Marcos, hijo del dictador de igual nombre, cooperó con la Corte para lograr la detención de Duterte, quien esperaba que la alianza política que tejió con los Marcos lo protegiera de una extradición. No fue así. A pesar de que su hija Sara es la actual vicepresidenta y fue elegida junto al mandatario, el gobierno colaboró con la CPI y posibilitó la captura, apenas aterrizó de un viaje desde Hong Kong, donde hacía campaña para las elecciones parlamentarias de mayo.

La coalición gobernante se rompió rápidamente, tras llegar al poder

en 2022, cuando Sara Duterte pretendió controlar el Ministerio de Defensa y las fuerzas de seguridad, y en vez recibió la cartera de Educación. Marcos se alejó de la familia Duterte, y dio un giro respecto de la línea seguida por su antecesor.

En lo doméstico, utilizó métodos menos violentos contra las drogas, priorizando la prevención y rehabilitación. En el frente externo, se alejó de China y volvió a alinearse con EE.UU. Actualmente Sara Duterte está a la espera de que el Senado inicie un juicio político en su contra por declaraciones contra el Presidente y eventuales actos de corrupción.

El conflicto entre estas dos poderosas familias políticas puede llevar inestabilidad a Filipinas, porque ambas tienen mucho poder político y gran respaldo ciudadano.

Los comicios de mayo podrán ser un termómetro de cuál de ambas dinastías retiene mayor poder. Es seguro que el arresto de Duterte será uno de los temas clave de la campaña electoral y podría determinar su resultado.

En cuanto a la justicia internacional, desde la firma del Tratado de Roma, que creó la CPI, su trabajo ha sido controvertido, y se ha topado con numerosas cortapisas políticas locales e internacionales. Es sabido que solo ha podido ejercer su jurisdicción en contra de individuos —autoridades o combatientes— provenientes de países sin demasiado peso en el ámbito internacional, en general africanos.

Actualmente la Fiscalía de la CPI investiga a Nicolás Maduro y a otras autoridades venezolanas, pesquisa que ha sido larga y difícil, con destino incierto. El caso de Duterte puede ser un hito en la historia de la Corte, porque mostraría su capacidad para hacer valer su jurisdicción internacional, puesta en duda con casos como los de Rusia e Israel.